

La presunción de autenticidad de los documentos privados en copia en el Código General del Proceso^{1*}

Nelly Luidina Cuevas Tarazona
Universidad Católica de Colombia.

Resumen

Este artículo pretende atender al postulado de prueba documental en el Código General del Proceso, haciendo especial énfasis en el desarrollo que ha tenido la *presunción de autenticidad* (art. 244) de los documentos privados en copia simple (art. 246). El lector encontrará un escrito que muestra cómo se ha tratado el tema de prueba documental y autenticidad, hasta llegar a la tan amplia presunción que trajo consigo el artículo 244 de la ley 1564 de 2012, principalmente, en lo que a copias se refiere. Además, se ampara en los principios del derecho procesal, el debido proceso y en decisiones de la Corte Constitucional, pues la pretensión insigne de la nueva ley, es armonizar con la realidad actual, a fin de hacer dinámico el ordenamiento jurídico y materializar el derecho sustancial.

Palabras clave: principios del derecho procesal, buena fe, copias, documentos, documentos públicos y privados, presunción de autenticidad.

Abstract

This article aims to serve the postulate of documentary evidence in the General Code of Procedure, with special emphasis on the development that has taken the presumption of authenticity (art.244) of private copy documents (art . 246) . The reader will find a brief showing how it has addressed the issue, documentary evidence and authenticity, to reach to the broad presumption that brought article 244 of Law 1564 of 2012, mainly what to copies referred. In addition, it relies on the principles of procedural law, due process and decisions of the Constitutional Court, because the flagship of the new law, is to harmonize with the current reality, in order to make dynamic the judicial system and realize the substantial law.

Keywords: principles of procedural law, good faith, copy, documents, public and private documents, presumption of authenticity.

*ARTÍCULO DE REFLEXIÓN presentado como Trabajo de Grado para optar al título de Abogada, bajo la dirección de la Doctora Consuelo Giraldo de la Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá.

Sumario

Introducción. 1. Principios del derecho procesal. 2. Documento. 3. Relevancia de la diferencia entre documento público y documento privado. 4. Presunción de autenticidad de los documentos privados en copia. Conclusiones. Referencia.



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Introducción

Los mecanismos que se usaban para hallar la verdad en la antigüedad eran restringidos, por ejemplo el juramento que se hacía a los dioses existentes en la época, Foucault (1995) hace referencia a una competencia:

La carrera comienza y los dos primeros competidores que se colocan al frente a la altura de la curva son Antíloco y Melenao. Se produce una irregularidad y cuando Antíloco llega primero Melenao eleva una queja y dice al juez o al jurado que ha de dar el premio que Antíloco ha cometido una irregularidad. Cuestionamiento, litigio, ¿cómo establecer la verdad? Curiosamente, en este texto de Homero no se apela a quien observó el hecho (...) solamente se plantea la querella entre los adversarios Melenao y Antíloco, de la siguiente manera: Después de la acusación de Melenao – tu cometiste una irregularidad – y la defensa de Antíloco – yo no cometí irregularidad – Melenao lanza un desafío: “pon tu mano derecha sobre la cabeza de tu caballo; sujeta con la mano izquierda tu fusta y jura ante Zeus que no cometiste irregularidad”. En ese instante, Antíloco, frente a este desafío, que es una prueba (épreuve), renuncia a ella, no jura y reconoce así que cometió irregularidad. (p.40)

Actualmente, para intentar hallar la verdad se cuenta con diferentes medios de prueba, entre ellos, la prueba documental. Los indicadores de la administración de justicia colombiana, se muestran negativos, ya que los procesos pasan dificultades, como lo es el hecho de estancarse. No es suficiente resolver un proceso solo con el juramento, ya que la dinámica actual, está dada para hacerlo a través de una prueba pericial, un documento, un testimonio, en la recopilación de diferentes pruebas, que le permitan al juez tener certeza para fallar. Por tanto, uno de los principales asuntos que aspira a contribuir, es la presunción de autenticidad de los

documentos privados en copia simple, que consagra la norma general procesal, al respecto se destaca algunos de los apartes de la exposición de motivos de la ley 1564 de 2012, como Vargas Lleras, Andrade, García, Vélez, Avellaneda, & Londoño (2012), señalan:

1. Garantizar la primacía y protección de los derechos constitucionales fundamentales, así como reconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y la diversidad cultural y étnica.
2. El Código General del Proceso, aplica a los modernos sistemas procesales que imperan en el mundo y acoge los adelantos en tecnologías de la información y la comunicación; uso de internet, documentos electrónicos para las actuaciones procesales, práctica de pruebas y expediente, entre otros.
3. (...) Se consagra una amplia presunción de autenticidad de documentos, pruebas y memoriales, ritualismos que solo trámites innecesarios han generado y muchas veces, injusticias al momento de adoptarse las decisiones finales de los procesos (sentencias).
4. El acceso a la justicia no puede ser considerado simplemente como un ingreso, que sería un criterio parasitario y burocrático, sino entendido como la acción de llegar a gozar de una justicia que tenga calidad y se concrete en una sentencia justa y pronta.
5. (...) Se da valor a la conducta procesal de las partes y se llega a ordenar que siempre en la sentencia el juez las califique con consecuencias probatorias.
6. (...) La manera de manejar los documentos y las copias no hace más que favorecer al justiciable y legislar para los tiempos actuales donde las copias, las fotocopias, además de los logros tecnológicos, son los usados por los ciudadanos en general.

Por tanto, hoy contamos con garantías adicionales que permiten la búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta no el resultado de una competencia, sino un proceso que permite aportar los diferentes medios de prueba y como se verá mas adelante, tener en cuenta dentro del debate procesal la copia simple de un documento.

Ahora bien, aunque pareciera que es tópico resuelto el tema de presunción de autenticidad² de los documentos privados en copia simple no lo es, ya que algunos jueces han sido renuentes al tema, y en sus decisiones se ha visto flaquear tal presunción. Lo anterior Puede evidenciarse en el fallo tanto del Juzgado 34 Administrativo de Bogotá como del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de reparación directa, al decidir que no valoraban las copias de documentos públicos allegadas al proceso. Como resultado, en el proceso no se reconocieron perjuicios materiales a favor del demandante, ya que las certificaciones salariales fueron allegadas en copia simple, de este caso conoció la Corte Constitucional en Sentencia SU-226 de 2013.

Otro caso, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó a la sociedad ejecutante que aportara el original del documento, pero ésta, ante la

² Artículo 244 “Es autentico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y lo que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en origina o en copia reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.

(...).

imposibilidad de hacerlo, adujo copia simple del mismo, la prueba fue rechazada por el tribunal con el siguiente argumento:

Que en principio, la parte ejecutada debió aportar el documento original de fecha 6 de junio de 2001, y que si el mismo no estaba en su poder, sólo podía aportar la copia del mismo según indica el artículo 268 del CPC, siempre y cuando hubiere sido protocolizada, o hubiere sido expedida por el juez que lleva el proceso donde obra el original del documento sin posibilidad de desglose, o hubiere sido demostrada su autenticidad mediante certificación de notario o secretaria de oficina judicial (Corte Constitucional, Sentencia T-213 de 2012, p. 5)

Así mismo, la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC3702-2015) en un fallo de tutela, dentro de un juicio ordinario de responsabilidad civil extracontractual, negó la petición. Toda vez, que los documentos allegados se hicieron a través de copia simple y este tipo de documentos no fueron considerados como pruebas idóneas para demostrar el daño. (p.8)

Lo anterior, muy a pesar de la intención desde la constituyente de 1991 y de lo consagrado en el Código General del Proceso, en especial a punto de la *presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia³ simple; puesto que algunos operadores judiciales desconfían de estos documentos y le restan mérito probatorio al grado de no tenerlos en cuenta en el debate procesal. Como se expuso, hay quienes se resisten a considerar la *presunción de autenticidad* (art. 244) de los

³ Artículo 246 “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.

Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.

documentos privados aportados en copia simple (art. 246) y para ello, se aferran a requisitos que riñen con la norma general.

En consecuencia, cuando el juez no tiene en cuenta como prueba documentos privados aportados en copia ¿estaría vulnerando el debido proceso y por ende el acceso a la administración de justicia?

Para resolver este interrogante, se partirá desde los principios del derecho procesal, en virtud de los cuales se inspira el alcance de la *presunción de autenticidad* de los documentos privados aportados en copia simple, y conforme a ellos, se interpretará el alcance del artículo 244 del Código General del Proceso.

1. Principios rectores del derecho procesal

La búsqueda de la verdad ha generado la necesidad de hacerlo a través de diferentes medios de prueba, cosa que como se indicó, no ocurría en la antigüedad, pues eran pocos los medios probatorios para hallar la verdad y algunos un tanto fantasiosos. Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con diversos medios de prueba, ya que el simple juramento tal como lo refleja la misma realidad, no es suficiente y para lograr establecer la verdad, nos vemos en la necesidad de apoyarnos, por ejemplo, en la prueba documental, en un testimonio, o en una prueba pericial. Por eso, el Estado administra justicia teniendo en cuenta un sistema de leyes que amparen los derechos para que haya paz social, además, busca que las personas actúen de acuerdo a la moral y las buenas costumbres, que comprende ser consciente de las acciones y sus posteriores repercusiones. Pues la ley existe para ordenar una sociedad y cuanto más justa la ley, mayor la confianza en el Estado, de conformidad con Beuchot Puente (2006) quien indica que “el derecho tiene como objetivo asegurar la justicia en la sociedad; el estado tiene que salvaguardarla, y es justamente con los derechos como lo realiza. Tienen que ser leyes justas”. (p.115)

Por cierto, el Estado cuenta con el juez, quien en virtud del poder que le asiste para dirigir el proceso, debe promover el goce efectivo de los derechos, buscando que la norma se acerque al ideal de justicia, labrando el camino procesal para que la ley sea dinámica, por tanto, la función del funcionario judicial permite que la norma no se quede simplemente en ordenamiento estático, pues en una sociedad cambiante, el director del proceso tiene poder oficioso, de probar la verdad a fin de amparar los derechos tutelados y esto permite que la norma no se estanque, sino que se acomode a los diversos cambios de la sociedad, pues de lo contrario tal como manifiesta Trujillo (2006):

(...) Pretender aplicar con la misma rigidez e inflexibilidad un sistema en estado de inercia, a la infinidad de posibilidades y variantes que se presentan en el tráfico social y jurídico, es lo mismo que poner en marcha un vehículo cuyas ruedas no giran (...) (p. 19).

Y es que el juez como director fundamental de justicia, debe hacer que sea dinámica la norma y actuar de conformidad con el espíritu del Estado Social de derecho, por ejemplo, con la nueva norma general dentro de una actuación procesal, la ley le permite al juez practicar de oficio o darle valor probatorio a aquellos documentos privados que se aporten en copia simple, conocer más de cerca los hechos y despejar la incertidumbre, siendo consiente que en sus manos está proteger los derechos o claudicar en el intento; y es de esperar por parte del operador judicial que resuelva las controversias ajustando la norma a la realidad para tratar de lograr justicia, Forero (2002) indica que el Doctor Davis Echandía en múltiples ocasiones manifestaba que:

La justicia es más un problema de hombres que de códigos, en el sentido en que con buenos jueces puede obtenerse una relativa buena justicia; mientras que con malos jueces, que frustren la buena

orientación de los códigos, solo puede obtenerse una justicia mala (p. 618).

En relación con el mismo asunto, las personas buscan que el operador judicial les reconozca su derecho amparados tanto en la ley como en el mandato constitucional; sin embargo, en algunas ocasiones dichos derechos se van en declive, debido a que el operador judicial se aferra a exigencias que están de más. Cuando pretende no darle valor probatorio a las copias simples y exigir en cambio autenticarlas, o cuando de plano no les da ningún valor probatorio como se mostró en los casos que trajimos a referencia en anterioridad. Este tipo de excesos no permite a las personas salvaguardar sus intereses a tiempo, y en la mayoría de los casos son los más desprotegidos los que no logran igualdad frente a la ley, muy a pesar de lo que indica Vidal (2009) “el estado social de derecho asume una tarea de promoción y remoción de las condiciones existentes para que la igualdad sea real y efectiva (...)” (p. 393), cosa que en la práctica como en los casos que se mencionó, se queda en ordenamiento estático.

Pues bien, en consonancia con lo anterior, corresponde al operador judicial la promoción efectiva de justicia, tal como señala Quinche (2008) “la norma constitucional habla del derecho “a un debido proceso público y sin dilaciones injustificadas. La Corte Constitucional ha vinculado el tratamiento de este derecho, con el derecho a una tutela judicial efectiva. (...)” (p. 218) en consonancia con lo que señala la Corte:

“La competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, siguiendo el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta, pues se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y por el respeto

a los derechos fundamentales de las partes en contienda. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones de la Constitución o de la ley”^[36], ya que encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia judicial, así como en los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros”. (Sentencia T-213 de 2012)

La protección que hace el constituyente en cuanto a quienes se encuentran en un debate procesal, involucra evidentemente, la labor del juez, ya que si bien es cierto, el operador judicial cuenta con cierto grado de autonomía, esto no es óbice para olvidar principios de obligatoria aplicación, como para este caso lo es el de buena fe sobre aquellos documentos, que sean aportados al proceso en copia simple, dando prevalencia con esto, al derecho sustancial sobre las formas y lograr materializar los derechos, a través de una tutela judicial efectiva.

La tutela judicial efectiva, como lo señalan Hernández, Cangrejo y Caveró (2010, p.65) no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, pero cuando tratamos el tema de *presunción de autenticidad* de los documentos que se aportan al proceso en copia simple, la relacionamos con tutela judicial efectiva, ya que tal presunción se traduce, en darle prioridad para nuestro caso, al derecho sustancial sobre las formas y la tutela judicial efectiva trata de un plazo razonable dentro del mismo, lo que quiere significar que las dos contribuyen al debido proceso, y a los principios de eficacia y eficiencia y buena fe. Habiendo hecho el anterior balance, a

continuación se propone un análisis⁵ de algunos principios procesales de cara a la *presunción de autenticidad* consagrada en el Código General del Proceso

Artículo 244 del CGP

Principios del derecho procesal

Documento auténtico.

Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

Verdad procesal: el cual se traduce, en la búsqueda de la certeza que se logra a través de los medios de prueba.

Buena fe: corresponde a la conducta responsable de las partes dentro del proceso, adecuada a la moral y las buenas costumbres.

Eficacia y eficiencia: eficaz es obtener el resultado y eficiencia conseguir el máximo resultado con el mínimo gasto.

Prevalencia del derecho sustancial: en cuanto el fin de todo proceso es la realización del derecho subjetivo.

Contradicción o audiencia bilateral: en virtud del derecho que le asiste a las personas de controvertir los hechos y las alegaciones que se formulen en contra suya.

Principio de exclusividad y obligatoriedad de la jurisdicción: nadie puede hacer justicia por su cuenta, los miembros de un estado cuentan con un sistema judicial y un orden preestablecido.

Fuente: Inspirada en la lectura del Dr. Jairo Parra Quijano de su libro “manual de derecho probatorio” y del Dr. Nattan Nisimblat en su libro “Código General del Proceso, derecho probatorio. Inducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad”.

Vale la pena seguir indicando, que la administración de justicia es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr convivencia social de conformidad con Monroy (2005) “(...) es imprescindible que los conflictos de intereses o incertidumbre con relevancia jurídica, deban ser resueltos o despejados para que haya paz social en justicia” (p. 695), en cuanto a hacer efectivos los derechos, se traduce para este caso, en que cuando se inicie una actuación procesal y la parte no cuente con el original no se mengüe su derecho por no tener en su poder el documento original, pero sí en cambio, sea efectivo su derecho a través de una copia simple, además, sin la dispendiosa necesidad de autenticarla, sino que, esa copia ingrese al proceso presumiéndose auténtica y como plena prueba.

Es importante reiterar, que lo que busca un proceso judicial es que se proteja un derecho que se encuentra amenazado, lo cual se logrará con los diferentes medios probatorios. El Estado Social de Derecho faculta al juez para que a través de un proceso emita un fallo, donde dicho derecho no sea usurpado, y el juez lo hará principalmente, con los medios probatorios aportados al proceso o decretados de oficio por él mismo. Dará pleno valor a aquellos documentos aportados en copia, permitiendo que la balanza se mantenga equilibrada en justicia, confiando en la buena fe de quien lo aporte, al respecto Gutiérrez (2014) comenta “que el derecho se relaciona con la idea de equilibrio o del punto medio del conflicto de las relaciones jurídicas” (p.. 43) esto en atención al principio de contradicción o audiencia bilateral, en virtud del cual, será posible controvertir los hechos que entren en la litis.

Lo anterior ya que, la persona que alega un derecho busca en el operador judicial amparo en el mismo, de conformidad con la balanza que es símbolo de igualdad y justicia, y el juez por medio de la actividad judicial logra reconstruir unos hechos y lo puede hacer a través de un documento presentado en copia, teniendo en cuenta que se presume como reproducción fidedigna del original, y además, recopilando

otras pruebas puede llegar a la certeza dentro del proceso, pues en palabras de Borja (2003) “los requerimientos de verdad, hacen dar un viraje en torno a establecer que se regula por el derecho, y poder determinar que otras consideraciones atinentes a prueba subsisten al margen de cualquier regulación jurídica” (p. 31) pero, ¿qué es la verdad?, El principio de verdad procesal indica, que el objeto del proceso es encontrar la verdad y en palabras de Nisimblat (2014):

La discusión no ha sido del todo clausurada, pues las nuevas tecnologías nos acercan cada día más al descubrimiento de los hechos; sin embargo, mientras contemplamos el proceso como un debate dialéctico, persistiremos en la idea de la verdad probada, que en suma será la verdad alegada (p. 99).

De este modo, para lograr llegar a la verdad dentro de un proceso judicial, la prueba será la que permita que reconozcan el derecho en litigio de conformidad con las formas propias de cada juicio; y será conforme a los elementos materiales probatorios que se aducen al proceso los que darán la certeza al juez, ya sea para ratificar ciertos hechos o simplemente para hacer ver otra realidad que no se pretendía en principio. Los elementos de prueba son determinantes al momento de conocer a quién realmente se le concede el derecho, por eso en el debate procesal se permite cualquier medio de prueba que no esté prohibido por la ley, teniendo en cuenta lo que señala Ramírez (2009) “la carga de la prueba, depende del respeto del derecho fundamental al debido proceso y de la racionalidad de las exigencias hechas a las partes” (p. 246), de tal suerte, que cuando en el proceso se aporte una copia y la otra parte la tache de falsa, tendrá entonces, la carga de probar esa falsedad.

Hasta este momento se ha visto, que el constituyente ha buscado la protección de los derechos, a través del juez con el papel de tratar de encontrar justicia en un proceso judicial, apoyado en los medios de prueba, en los principios generales del

derecho, que permiten una interpretación adecuada conforme a la misma. Por eso, la *presunción de autenticidad* de los documentos aportados en copia en un proceso judicial, se ve relacionada con algunos principios. Ahora, para continuar con esta exposición, se verá cual es el alcance y significado de lo que la norma general considera como documento.

2. Documento

Como se mencionó, cuando se allegue dentro de un proceso un documento aportado en copia con la *presunción de autenticidad* y la otra persona lo desconozca, tendrá entonces la carga de probar que no es suyo, por ejemplo, que esa copia corresponde a otra obligación; en todo caso, cuando se aporta un documento en copia dentro de una estancia judicial con la *presunción de autenticidad*, se pretende que de fe, de una obligación a no ser de que la contraparte diga algo diferente respecto del mismo, entonces entrará el debate para demostrar que efectivamente no corresponde a esa obligación.

Pero veamos, el Código General del Proceso en su artículo 243 señala, un listado de lo es considerado documento ⁶, ya que en principio se creería que solo es documento aquel que consta en papel, por tanto, la norma general procesal hace referencia a un listado de lo que es considerado como documento dentro de un proceso, a fin de no dejar por fuera aquello que pueda servir como prueba documental dentro de la Litis.

Artículo 243. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares (...).

Ahora bien, dentro del proceso, un documento puede ser aportado en copia e ingresará presumiéndose auténtico, lo cual es diferente a la valoración que haga el juez respecto a esa prueba dentro de dicho proceso, ya que como es sabido en el proceso judicial existen los momentos de la prueba, los cuales corresponden a la petición o el aporte de pruebas, que por regla general se hace en la demanda y en su contestación, o al decreto de la prueba, que compete a la autorización del juez para que ésta ingrese al proceso. Por otra parte, la práctica judicial, consiste, en la valoración que hace el juez respecto a esa prueba dentro de dicho proceso, señala López (2002) “la valoración de las pruebas es una operación que busca determinar el concreto valor que se le debe otorgar al medio de prueba en la reproducción de la certeza” (p. 281); por tanto la *presunción de autenticidad* de los documentos, está dada, desde el principio, cuando se allega al proceso la copia.

Dicho esto, cuando se entra a valorar la prueba documental presentada en copia, es porque la *presunción de autenticidad* ya se materializó, y en ese momento procesal será el juez a través de una operación razonada y junto a todos los medios probatorios que contempla la ley, que comenzará a analizar el caso en debate.

Ahora bien, uno de los principales problemas de la administración justicia ha sido el hecho precisamente, de casos como los que se presentaron al inicio del escrito, donde la justicia no da respuesta eficiente a las necesidades de los asociados, que no protege los derechos a tiempo, que las personas sienten que están rogando porque un derecho le sea reconocido como los casos que se mencionaron al inicio de este artículo; para contrarrestar esta situación, se comenzó a analizar los beneficios que traería acoger el modelo mundial de Código General del Proceso, que armoniza con el Estado Social de Derecho y con el postulado constitucional, a fin de lograr un ideal de justicia, por tanto, Hernández (2008), manifiesta que:

La contribución del doctor Canosa Suarez titulada “hacia la oralidad en la justicia civil”, es prolija al explicar cómo esta es una tendencia

mundial que proviene del siglo XVIII “fruto del desarrollo posterior de 1789”; que resulta común, junto con la constitucionalización de las garantías procesales, tanto en los sistemas modernos de la Europa continental como a lo de los países anglosajones; y que, en definitiva, solo una estructura procesal que conceda, preponderancia a la oralidad frente a la escritura, es la única que tiene la virtualidad de lograr simplificar, facilitar la intermediación, la concentración, la economía, y la agilización de los trámites judiciales (p. 16).

Desde hace ya algún tiempo, se venía trabajando en el tema de la oralidad dentro de los procesos, pues la tardía justicia, la demora en dar respuesta por parte de la administración, el estancamiento de los procesos, hizo que se fuera pensado en un código general para los procesos hasta que se logró dicho cometido, esta normatividad, permite que documentos aportados al proceso en copia simple agilice el trámite al presumírseles auténticos. Lo cual contribuye con el espíritu de la ley 1564 de 2012, pues busca agilizar el proceso reduciendo exigencias de tipo formal y dando prioridad a todo aquello que signifique garantizar y proteger un derecho, en palabras de Cruz (2014) “Uno de los puntos absolutamente trascendentes en la reforma, que esperamos aclare una bizantina discusión doctrinaria y jurisprudencial, es la relativa a la autenticidad de los documentos privados” (p.313), en definitiva, se pretende el acceso a la administración de justicia y la materialización de los derechos, partiendo de una conducta de lealtad de las partes que genere confianza, para que el juez se oriente hacia esa finalidad, para que esta presunción contribuya en la protección efectiva de los derechos de los administrados.

Antes de ver la normatividad colombiana respecto al tema de *presunción de autenticidad* de los documentos privados, se observa, que legislaciones como la ecuatoriana (Código Procesal Civil Ecuatoriano, Artículo 399) trata el tema de autenticidad como presunción para todos los documentos públicos, mientras que para los documentos privados solo aplica para los cuatro casos específicos consagrados en su artículo 399, es decir, Ecuador aún mantiene el viejo sistema de

desconfianza en cuanto a presumir la autenticidad de todos los documentos; por otra parte, la legislación española (Derecho procesal civil de España LEC, Arts. 267, 326 y ss) indica que los documentos privados harán plena prueba en el proceso cuando su autenticidad no sea impugnada, y cuando se impugne se podrá pedir el cotejo pericial, y en cuanto a los documentos aportados al proceso en copia en caso de impugnación se cotejará con el original si es posible y si el original no se encuentra, se determinara su valor probatorio de acuerdo a las reglas de la sana critica, por lo tanto, nuestra norma general armoniza con la ley de enjuiciamiento civil española ya que el Código General del Proceso adoptó muchos de sus postulados, especialmente, lo que consagra nuestra ley procesal en el artículo 244.

Así las cosas, el artículo 243 del Código General del Proceso lista lo que es considerado documento, sobre esta base, es preciso señalar lo que algunos doctrinantes y la jurisprudencia tratan como documento, por tanto, Cañón (2013), indica que “(...) Como medio probatorio, se denomina “documento” a todo objeto representativo del sentimiento o del pensamiento (p.301)”, es decir, que el documento refleja una situación que se quiere dar a conocer a una persona, así mismo, Cañón (2013), indica que:

Conforme a la jurisprudencia “por prueba documental se entiende la constancia gráfica que se deja a cerca de la celebración de un contrato la realización de un acto o la ocurrencia de un hecho cualquiera. Se trata, pues, de una prueba indirecta, de carácter histórico, representativa de un acontecimiento pretérito, que si es litigioso o tiene trascendencia en un proceso, permite al juez conocer la verdad acerca del mismo (p. 302).

Continuando con la descripción de documento, señala Nisimblat (2014) que el “documento es una cosa mueble que ha sido manipulada por el hombre” (p. 362); en tanto que para Devis (1994) “es un medio de prueba real, objetivo, histórico y

representativo” (p. 417), también es aquel que podemos percibir a través e los sentidos y que nos permite reconstruir unos hechos.

Además de lo anterior, la ley 1564 de 2012 en su artículo 243, indica que el documento puede ser privado o público, y de manera general, y en cuanto a lo que es documento privado, señala que es todo mueble que tenga carácter representativo o declarativo, Cañón (2013) contribuye, diciendo que documento privado es:

Aquel que otorga o generan las partes, como medio preconstituído y preparado con anterioridad, dentro de sus relaciones privadas, para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones sin autorización oficial o pública, pero, regulado por el ordenamiento jurídico, con el fin de probar hechos jurídicos (p. 313).

Mientras que Ramírez (2009) indica que en abstracto, que antes de la nueva regulación general se consideraba que “Los documentos son una prueba preconstituída, contienen actos o hechos que voluntariamente fueron decantados por las partes para que fueran verificables en el futuro” (p. 202), con la nueva disposición general, la prueba documental se considera como prueba extraprocesal. Una vez se ha establecido lo que es considerado documento en la legislación colombiana, es preciso, manifestar por qué los documentos se clasifican en privados y públicos.

3. Relevancia de la diferencia entre documento público y documento privado

Pues bien, es importante identificar cuando es documento privado y cuando público⁷. Se destaca, que el documento privado solo será oponible entre las partes

⁷ El Código General del Proceso en su artículo 243 párrafo segundo indica que “los documentos son públicos o privados. Documento Público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. (...)”.

mientras que el documento público es oponible para todos, en cualquier caso, en el evento de fraude en el documento se estará inmerso en un delito penal. En los documentos públicos la exigencia de veracidad es irrefutable y constituye un delito especial, mientras que, en los documentos privados no existe acuerdo en que los particulares deban decir siempre la verdad en sus documentos, pero como se señala más adelante, están en la obligación de actuar de buena fe y amparados en este principio es precisamente que se presumirá la autenticidad, de sus documentos aportados el proceso en copia. De la anterior consideración, y conforme al artículo 243 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

(.....)

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

Se observa, que por su origen, el documento puede ser público o privado, el primero, es definido como aquel que es elaborado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o cuando es otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas, en tanto que el segundo, “en general, todo mueble que tenga carácter representativo declarativo” (art. 243 CGP) es aquel que no tiene las características del primero, ya que éste nace de las relaciones entre particulares.

Respecto a esta clasificación, Bernate (2010) cuenta que la Corte Suprema de Justicia aseguró que “al autenticar ante un funcionario público un documento privado, no le hace perder su carácter de privado; no obstante, la diligencia de autenticación que allí se consigna constituye un documento público” (p. 105). Esta

separación es importante, debido a que en el evento de falsedad en el documento se estará inmerso en un delito penal, Bernate (2010) en palabras suyas expone que:

La diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica está dada por la diferencia en el atributo del documento que ataca una y otra, en tanto que mientras la falsedad material atenta contra la autenticidad del documento, la falsedad ideológica afecta la veracidad del mismo (p.105).

De otro lado, es pertinente manifestar, que los documentos tanto públicos como privados puede ser aportados en un proceso judicial tanto por las partes como por terceros, y los documentos se pueden clasificar en diferentes grupos, ya que pueden ser públicos o privados, declarativos o representativos, auténticos, originales o copias; por otra parte, se pueden clasificar aquellos provenientes de las partes, tal como señala López (2001) “en sentido amplio, demandante, demandado, llamados en garantía, coadyuvantes, incidentales casuales” (p.294).

Pues bien, la nueva disposición interpretada tanto con la Constitución de 1991 como con lo consagrado en el Código General del Proceso, permitirá acceder a la administración de justicia y materializar el derecho sustancial. Por consiguiente, con la intención de ver cómo funciona, la figura de *presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia simple, se procede a hacer la siguiente exposición.

4. *Presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia.

En virtud de lo expuesto, se procede a desarrollar el tema de *presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia simple, pero primero es esencial, señalar que el fundamento de esta presunción, la semilla, es justamente el principio de buena fe, este postulado de rango constitucional significa obrar con honestidad, para Puentes (2014) “se relaciona con que las personas actúen de manera honesta

y sincera, lo cual genera convicción sobre un hecho” (p.67), por su parte Valencia (2006) manifiesta que:

“la buena fe indica que cada cual debe celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, ejercer sus derechos, mediante el empleo de una conducta de fidelidad, o sea por medio de la lealtad y sinceridad que impera en una comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable” (pp. 212-213).

De acuerdo con lo expresado, es preciso dentro de las relaciones jurídicas actuar de acuerdo con la moral y las buenas costumbres, ya que una vez ingresa al proceso un documento se presume auténtico, porque se espera que las personas actúen por una parte con lealtad y de otra parte con confianza en esa lealtad.

Y es que la presunción de autenticidad que se predica de cualquier documento, deriva su razón de ser en una conducta que consiste precisamente en aportarlo al proceso de manera sincera, leal, de conformidad en el art. 83 de la Constitución Política, López (2001) indica que “la presunción de autenticidad que se predica de cualquier documento, deriva su razón de ser en una conducta que consiste precisamente en aportarlo al proceso, en lo que se recoge lo contemplado en el art. 83 de la C.P.⁸” (p.315). El principio de buena fe nos da confianza en las manifestaciones que se hagan respecto a los documentos aportados al proceso en copia simple, siguiendo a Rojas (2015) “tener por cierta la autoría de un documento a partir de la afirmación de quien lo esgrime, es la consecuencia de presumir la buena fe de quien está en el deber jurídico de obrar de esa manera” (p. 417), precisamente la confianza en el proceso hará más expedito el caso, ya que el actuar

⁸ Artículo 83 de la Constitución Política Colombiana de (1991). “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”

de las partes procesales, siguiendo la directriz de hacerlo de buena fe, permite avanzar en el proceso en otros asuntos ya no de carácter formal sino sustancial.

Por otra parte, en el derogado Código de Procedimiento Civil, el actuar de buena fe se veía como un deber y una responsabilidad por parte de quienes se encuentran vinculados en el proceso y en palabras de Parra (2006) “tiene sustento en los deberes y responsabilidades de las partes y de sus apoderados” (p. 548), como se señalaba, se trata de una conducta seria y responsable, manifestada en el respeto por la justicia.

Ahora, el hecho de presumirlos auténticos no significa que no puedan ser tachados de falsos, al respecto Parra (2006) indica que: “darle autenticidad a los documentos, por el simple aporte al proceso, significa probatoriamente manejarla como presupuesto de trabajo(...)” (p. 555), Es decir, como cualquier documento, dentro de la respectiva audiencia, las copias simples pueden ser tachadas de falsas; toda vez, que con esto se garantiza el principio de publicidad y el de debido proceso, contrario *censu*; si la contraparte no hace manifestación, alguna será prueba dentro del proceso y no se estaría afectando ningún derecho.

Además de esto, es importante resaltar que en los procesos donde se aduzca un documento privado en copia éste ingresa con la *presunción de autenticidad* López (2001) “la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente contenga, pero en nada se refiere a su valor probatorio” (p. 295), en este artículo, dentro del título “documento” se habló de los momentos de la prueba, pues bien, cuando una persona aporta al proceso una copia de una obligación y la contraparte no hace manifestación alguna acerca de su autenticidad, la copia tendrá el mismo tratamiento que el original y el juez valorará el documento de conformidad con lo que establece la ley, ya no para estudiar su autenticidad, sino para analizar el caso en debate.

La presunción de autenticidad parte, desde la Constitución de 1991 que consagra a la persona como su principal propósito, en tal virtud, se estableció la buena fe de las mismas en sus actuaciones, a partir de este postulado, se comenzó una carrera a través de diferentes normas que buscaban amparar la presunción de autenticidad soportado en la buena fe constitucional, Álvarez (2003) indica:

Así por ejemplo, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se agregaron los artículos 11, 12 y 13 de la ley 446 de 1998, que establecen la presunción de autenticidad de los documentos privados emanados de las partes, incluido el título ejecutivo, pero quedó vigente la larga lista de documentos que ya se presumían auténticos, los cuales como es obvio quedan cobijados por aquella regla general (...). (p. 53).

En ese mismo sentido, nótese diferentes leyes que trataban de legislar el tema hasta que se logró llegar a la *presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia en el Código General del Proceso, por tanto, acogemos el desarrollo legal que trae Rojas (2015), en palabras suyas:

(...) En 1991 se contempló la presunción de autenticidad a favor de los documentos privados que fueran a ser incorporados a un expediente judicial (Decreto 2651 de 1991, art. 25) (...); en 1998 se prescribió que los documentos privados incorporados a expedientes judiciales se presumen auténticos, salvo los memoriales que impliquen disposición del derecho en litigio y los que envuelvan la constitución de apoderado judicial (ley 446 de 1998, arts. 11, 12 y 13), regulación que se aplicó solo respecto de los documentos originales (...); en 2003 tales reglas fueron incorporadas en el artículo 252 del CPC (ley 794 de 2003, art. 26); en 2010 se estableció que los documentos privados

en originales o en copia, emanados de las partes o de terceros se presumen auténticos (salvo los documentos dispositivos provenientes de terceros); y finalmente en el CGP se extendió la presunción de autenticidad a todos los documentos, excepto los memoriales que impliquen la constitución de apoderado judicial primitivo (arts. 74-2 y 244). (p. 418).

Por eso, se ha venido hablando en palabras de Parra (2006) que “Cuando se emprende la búsqueda de la autenticidad de un documento privado, se pretende obtener certeza objetiva, sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado” (p. 553), de esta manera se tiene plena confianza en que aquella persona dentro de la actuación procesal, se comporta de acuerdo a una conducta de respeto por el proceso, en el entendido de que el documento privado en copia lo firmó, lo elaboró o esta manuscrito por ella.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, es claro que el desarrollo de la presunción de autenticidad de los documentos privados pretende contribuir de manera positiva dentro del escenario procesal. Como se indicó, con *la presunción de autenticidad* de los documentos privados en copia en la ley 794 de 2003, las copias de los documentos privados emanados de las partes no se presumían auténticos, pero luego con la ley 1395 de 2010, tanto el original como la copia de los documentos privados que provengan de las partes y que sean allegados al proceso judicial con fines probatorios se presumían auténticos.

Ahora bien, se dijo que la Ley 1395 de 2010, presumía auténticos los documentos privados aportados al proceso en copia simple, que no requerían nota de presentación personal ni autenticación, pese a ello, el 7 de junio de 2012 la Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil en (Sentencia 2012-01083) produce un fallo, donde continúa diciendo que las copias simples no se presumen auténticas, argumentando que el Código de Procedimiento Civil, tiene un listado de cómo dotar

de autenticidad a la copia, entonces seguían exigiendo los requisitos para autenticar las copias. En este punto, cuando se sancionó la ley 1395 de 2010 contenía la presunción de autenticidad, de los documentos privados en copia simple sin requisitos formales como autenticaciones, y por otra parte, estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, que señalaba las formas de autenticar una copia simple. Así las cosas en ese momento, en el ordenamiento jurídico colombiano, se presentaba una antinomia jurídica, de la que trata la ley 153 de 1887 en su artículo 2⁹, por tanto, de conformidad con lo consagrado en la ley, debía darse aplicación a la ley 1395 de 2010, pero lo que se hizo fue una interpretación contra la ley, como se evidenció. Como consecuencia, la ley 1564 de 2012, derogó el CPC y ratificó la presunción de autenticidad que trataba la ley 1395, ampliando aún más su espectro.

Por consiguiente, la abolición de formalismos que consagra esta ley, no resultaría acorde, si el juez dentro de sus facultades para apreciar la prueba, no respeta el orden legal preestablecido y los derechos fundamentales de las partes en contienda, por tanto, pese a su independencia judicial, no le es dable apartarse de postulados constitucionales como legales, veamos lo que López (2001) manifiesta:

La autenticidad se predica tanto de los documentos originales como de las copias. Respecto del tema, que resulta de particular interés dado la discusión que sigue generando, pues aún algunos se niegan a aceptar que la presunción de autenticidad no diferencia entre originales y copias y se aferran en sostener que solo se predica la misma de los originales, es menester volver sobre el art. 11 de la ley 446 de 1998 para demostrar que hoy no es posible mantener esa distinción (p. 312).

⁹ La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.

Lo anterior nos hace pensar en que la norma ha tratado de dar valor a las copias, pero tal parece que el operador judicial se siente desconfiado cuando ingresa al proceso una copia simple, por tal razón, la nueva norma general extinguió cualquier desconfianza, diciendo en su artículo 244 que los “documentos públicos y privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos”, sin dejar espacio a apreciaciones desconfiadas cuando al proceso se aporte una copia; De acuerdo a Nisimlat (2014), el Còdigo General del Proceso:

En los artículos 244, 245 y 246, determinó que las copias tendrán, salvo que una norma especial exija lo contrario, el mismo valor del original, caso en el cual corresponde a la parte contraria solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella, lo cual deberá realizarse en la audiencia correspondiente (p. 373).

La adecuada aplicación de la Ley 1564 de 2012, contribuye al hecho de descongestionar los despachos judiciales, además este postulado cuenta con sólido respaldo constitucional, pues en aras de garantizar el debido proceso, la parte a quien se le aduzca un documento en copia, dentro de la debida acción procesal, podrá tacharlo de falso en la oportunidad correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 244 y 269 del CGP, ya que en vista de ello, se busca la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, sin olvidar derechos de envergadura constitucional como el debido proceso, manifiesta la Corte Constitucional en Sentencia SU 774 del (2014):

Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso (...). El artículo 11 del CGP expresamente señalo que ‘al

interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto del procedimiento es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. (...) el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

Desde hace ya algún tiempo, se estaba trabajando el tema de oralidad dentro de los procesos, mientras esto acontecía, se veía la urgencia de regular temas como el de presunción de autenticidad de los documentos privados, pues como se observó, se crearon en el camino diferentes normas que trataron de amparar el tema, pues el exceso formalismo configuraba demora en dar respuesta por parte de la administración y esto estancaba el proceso, o de plano se caía el proceso ya que una copia no la consideran como prueba y si el juez pedía el original y la parte no lo tenía, entonces hasta ahí llegaba el proceso, como se puso en precedencia en los casos que trajo este escrito. Por eso, la norma general, permite que documentos aportados al proceso en copia agilicen el trámite al presumírseles auténticos, lo cual contribuye con el espíritu de la de la Ley 1564 de 2012, pues busca agilizar el proceso reduciendo exigencias de tipo formal y dando prioridad a todo aquello que signifique garantizar y proteger un derecho; en palabras de Cruz (2014) “Uno de los puntos absolutamente trascendentes en la reforma, que esperamos aclare una bizantina discusión doctrinaria y jurisprudencial, es la relativa a la autenticidad de los documentos privados”. (p.313).

Ahora bien, el hecho de presumirlos auténticos no significa que no puedan ser tachados de falsos o desconocidos como cualquier otro documento, por tanto, las copias simples pueden ser tachadas de falsa, así mismo, si la copia se ha logrado a través de algún tipo de alteración (como se indicó en anterioridad) o fraude, no solo no, se tendrá en cuenta dentro del proceso, sino que se estará inmerso en un delito de tipo penal, por eso es de vital importancia garantizar el principio de publicidad y el de debido proceso, Rojas (2015) al respecto indica que:

En todo caso lo más importante es que el contenido de la copia sea exactamente igual al del original, es decir que la integridad del documento no sufra mengua en la copia, para que pueda gozar del mismo tratamiento. Cualquier alteración del contenido impide catalogarla como copia del documento y puede aniquilar su valor probatorio (p. 431).

La lectura congruente de la nueva norma procesal, lleva a comprender que la ley 1564 de 2012, permite aportar en un proceso judicial un documento en copia o que el juez tiene el deber legal para pedir una copia y darle valor probatorio a la misma, además, como se indicó en un comienzo, el operador judicial cuenta con diferentes medios de prueba para corroborar la información que contiene la copia, ya que en virtud de la presunción de autenticidad se genera un debate dentro de la Litis y como consecuencia, ese documento en copia, será prueba o por el contrario se tachará de falsa, según el caso, para Cruz (2014)

“Las nuevas disposiciones permiten a los litigantes aportar al proceso los documentos en originales o en copias, salvo que éstas últimas nos sean permitidas por la ley, verbi gratia, el título ejecutivo, entre otros muy pocos. El tema de que una copia de un documento gane autenticidad o no dentro del proceso depende de si las partes fomentan un debate en torno de esa misma autenticidad, de lo contrario deberá siempre tenerse por auténtica” (p. 314)

Reiteramos, que en aras de garantizar el debido proceso, la parte a quien se le aduzca un documento en copia, dentro de la debida acción procesal podrá tacharlo de falso en la oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 y 269 del CGP. Por otro lado, Como consecuencia de lo que se ha visto con el nuevo Código General del Proceso, la Corte se vio en la necesidad de cambiar su línea jurisprudencial respecto a la presunción de

autenticidad de los documentos aportados al proceso en copia simple¹⁰, dando así, valor probatorio a todos aquellos documentos que sean aportados en cualquier proceso judicial a través de copias. La presunción de autenticidad está consagrada para todos los documentos, Azula Camacho (2003) indica que, “en la actualidad su entorno, es mucho más amplio, por comprender cualquier forma de expresión que conste en una cosa, como es la fotografía, el video la cinta magnetofónica, etc.” (p.192), en cualquier caso, lo relevante de un documento aportado al proceso ya sea en copia o en original, es que su contenido corresponda a lo que se discute en el proceso, tal como Rojas (2015) manifiesta,

Para darle crédito al documento es necesario asegurarse que la imagen que contenga corresponde al objeto representado, y que las expresiones humanas en él registradas pertenecen a un individuo identificado. Esto en otras palabras, emplear un documento para averiguar o corroborar un hecho presupone haber establecido su autenticidad (p. 416).

En definitiva, a partir del principio de buena fe se confía en los documentos aportados al proceso, además la contraparte puede manifestarse acerca de la *presunción de autenticidad* de la copia, pero siempre que la copia simple contenga situaciones relacionadas con el debate procesal, Rojas (2015) manifiesta que:

Por consiguiente, parece obvio suponer que los documentos aportados al proceso judicial son confiables, es decir, que los objetos que ellos representan son reales y que las expresiones humanas que contienen pertenecen a la persona a la cual se le atribuyen; en otras palabras, que son documentos auténticos. De ahí que el legislador

¹⁰Recientemente en sentencia SU 774 de 2014 la Corte, cambió su jurisprudencia contenida en la SU 226 de 2013, ya que considera que la intención del legislador al expedir el CGP, fue la de reducir los requisitos formales que impiden la valoración probatoria de los documentos públicos aportados en copia simple.

haya optado por presumir la autenticidad respecto de todos los documentos que sean llevados al debate procesal (p. 417).

El Código General del Proceso, nos da una luz al final del camino ya que no solamente contempla en sus nuevas disposiciones un estilo de justicia que busca acomodarse a la modernidad, a la necesidad de que las personas sientan que sus controversias van a encontrar en la administración de justicia soluciones tanto serias como eficaces, por eso es que, la *presunción de autenticidad* de los documentos privados tanto en copia simple, goza de *presunción de autenticidad* “*iuris tantum*”¹¹ la cual admitirá prueba en contrario. La *presunción de autenticidad*, de conformidad con Nisimblat (2014) debe armonizarse con lo dispuesto en el art. 166 del CGP, según el “cual las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice” (p.371).

Desde hace ya algún tiempo, se estaba trabajando el tema de oralidad dentro de los procesos, mientras esto acontecía, se veía la urgencia de regular temas como el de *presunción de autenticidad* de los documentos privados, luego las copias simples, pues como se observó, se crearon en el camino diferentes normas que trataron de amparar el tema, pues el exceso formalismo configuraba demora en dar respuesta por parte de la administración y esto estancaba el proceso o en el peor de los casos se decaía el proceso. Por eso, la norma general, permite que documentos aportados al proceso en copia simple, agilicen el trámite al presumírseles auténticos, lo cual contribuye con el espíritu de la Ley 1564 de 2012, pues el fin es materializar la ley sustancial, eliminando exigencias de tipo formal y dando prioridad a todo aquello que signifique garantizar y proteger un derecho, lo anterior es importante, para comprender que el tema de *presunción de*

¹¹ Significa que se presume la existencia de un determinado acto jurídico, pero puede existir una prueba que determine lo contrario.

autenticidad de los documentos privados en copia simple, está dado para quienes lo hayan elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento, Cruz (2014) nos dice que:

(...) Debemos entender que el derecho (por lo menos el normativo) es uno solo y no podemos permitir matices ni antinomias jurídicas; el concepto de documento debe ser el mismo en civil, en penal o en laboral, y en todos los distintos ámbitos, tanto el documento privado como el público, y las copias de ambos deben ser considerados auténticos, salvo que se demuestre lo contrario al interior de los respectivos procesos (p. 315).

Como consecuencia, a través de un documento aportado en copia simple es posible iniciar una actuación procesal de cualquier naturaleza y ante cualquier jurisdicción, ya que posee valor probatorio, atendiendo al principio del debido proceso los pueden impugnar las partes según sea el caso. Así, quien aporte un documento en copia su contraparte, la puede tachar de falsa en la contestación de la demanda o en la audiencia de conformidad con lo que establece el artículo 269 del CGP; con esto se garantiza equilibrio en la contienda y la igualdad en el debate procesal. Además, es importante recordar la facultad que tiene el juez de decretar pruebas de oficio, ya que en caso de que los documentos aportados en copia simple no lo lleven al convencimiento de los hechos, su deber legal, es buscar la verdad a través de los diferentes medios de prueba, pues tal como lo dice la conocida frase de Shakespeare (1998) "... Pruébalo, de tal suerte que la prueba no deje ni gozne ni perno de que pueda colgarse una duda" (p. 80), y a sabiendas de la existencia de otros medios probatorios, el juez puede ampararse en ellos, para que lo lleven a la absoluta certeza del debate. Por tanto, no le es dable hoy al funcionario judicial, rechazar una copia simple, pues además, en virtud del principio de buena fe, es de esperarse que sea fidedigna al original, que muestre los hechos que se pretenden hacer valer en el escenario procesal, siendo válido que una persona acceda a la

administración de justicia iniciando un proceso teniendo como prueba, por ejemplo, una copia simple.

En síntesis, sí se vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia cuando el operador judicial no otorga valor probatorio a documentos aportados al proceso en copia simple, ya que la esencia de la nueva norma general, es materializar el derecho sustancial y que el proceso sea un vehículo efectivo para lograrlo en el menor tiempo, sin dilaciones injustificadas como autenticaciones o presentaciones personales, además, las partes cuentan con mecanismos idóneos para manifestarse sobre las copias simples, como se indicó con anterioridad, lo cual garantiza un debate procesal en igualdad de condiciones teniendo en cuenta un debido proceso.

Conclusiones

De conformidad con el artículo 244 y 246 de la nueva disposición el documento privado presentado en copia simple, debe ser considerado auténtico, sin más apreciaciones o requisitos, sino que, se actúe de conformidad con la norma general procesal, a fin de primar la protección de los derechos de los administrados.

El Código General del Proceso pretende que en el ámbito procesal todos hablemos el mismo idioma, pues esta disposición derogó el Código de Procedimiento Civil y el listado de normas que trataron en su momento de regular el tema, teniendo el fin materializar el derecho sustancial y agilizar los procesos; por tanto, en la prueba documental se ratificó y amplió el espectro, en cuanto la presunción de autenticidad, de los documentos privados aportados en copia simples dentro de un proceso judicial.

Por mucho tiempo se habló de presunción de autenticidad de los documentos privados, hasta que se vio la necesidad de amparar, también, los privados en copia simple (con excepción de los poderes art. 74 CGP) haciendo que la administración de justicia vaya de la mano con el Estado Social de Derecho, atendiendo la constituyente de 1991, pues esta presunción se ampara en el principio de buena fe y en el debido proceso.

Poco a poco, la administración de justicia va armonizando con la nueva disposición, tanto así, que en Sentencia SU 774 de 2014 la Corte cambió su precedente, en lo que respecta al valor probatorio de las copias simples dentro de un proceso. Con la entrada de la nueva norma general y con la implementación de la oralidad, ingresa la presunción de autenticidad de todos los documentos privados en copia, su importancia radica en que termina desformalizando, porque ya no se necesitan autenticaciones ni presentaciones personales. La nueva normatividad general, debe interpretarse con criterio lógico para brindar efectiva aplicación al proceso y hacer efectivos los derechos consagrados en las leyes, y que, en ejercicio del debido proceso, la copia dentro del debate procesal, podrá ser tachada de falsa o desconocida (no reconocimiento).

Referencias

- Álvarez Gómez, M.A. (2003). *Apuntes sobre la reforma al Código de Procedimiento civil*. Bogotá D.C. Casa Editorial Universidad Santo Tomás.
- Azula Camacho. J. (2003). *Manual de derecho procesal. Pruebas judiciales*; BogotáD.C.: Temis.
- Bernate Ochoa, F. (2010). *Delitos contra la fe pública*. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario.

- Beuchot Puente, M. (2006). *Filosofía del derecho, hermenéutica y analogía*. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás.
- Borja Niño, M.A. (2003). *La prueba en el derecho colombiano*; Bucaramanga, Colombia: UNAB.
- Cañón Ramírez, P.A. (2013). *Teoría y práctica de la prueba judicial*. Bogotá D.C.: AB C Ltda.
- Cruz Tejada, H. (2014). *El proceso civil a partir del Código General del Proceso*. Bogotá D.C.: Uniandes.
- Devis Echandía, H. (1994). *Compendio de derecho procesal. Pruebas judiciales*. Medellín Biblioteca jurídica DIKE.
- Forero Silva, J. (2002). *La prueba*. Homenaje al maestro Hernando Devis Echandía; Bogotá D.C.: Universidad libre de Colombia.
- Foucault, M. (1995). *La verdad y las formas jurídicas*. Barcelona. Gedisa.
- Gutiérrez Gómez, G. Y. (2014). *Estado Social de Derecho o estado garantista y el mito de la responsabilidad extracontractual de los entes jurídicos*. Estados Unidos. Palibro LLC.
- Hernández Villareal, G. (2008). *Temas vigentes en materia de derecho procesal y probatorio*. Homenaje al doctor Hernando Morales Mejía. Bogotá. D.C. Universidad Nuestra Señora del Rosario.

- Hernández Villareal, G., Cangrejo Cobos, L.A., & Caveró Ruiz, H. (2010). *Actualidad y futuro del derecho procesal. Principios reglas y pruebas*; Bogotá D.C.: Universidad del Rosario.
- López Blanco, H.F. (2001). *Procedimiento civil. Pruebas*; Bogotá; Dupré ediciones.
- López Jiménez, R. (2002). *La prueba en los juicios por jurados*. Valencia-España; Tirant Lo Blanch.
- Monroy Gálvez. J. (2005). *XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal*. Bogotá D.C. Universidad Libre de Colombia.
- Nisimblat, N. (2014). *Código general del proceso, derecho probatorio. Introducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad*. Bogotá D.C.: Doctrina y Ley.
- Parra Quijano, J. (2006). *Manual de derecho probatorio*. Bogotá D.C: Librería ediciones del profesional.
- Puentes, E. (2014). *Apuntes jurídicos y jurisprudenciales sobre el derecho a la intimidad en Colombia*. Bogotá D.C.: Juan Camilo Puentes Editor.
- Quinche Ramírez, M. F. (2008). *Derecho constitucional colombiano de la carta de 1991 y sus reformas*; Bogotá D.C.: Casa Editorial Ibáñez.
- Ramírez Carvajal, D.M. (2009). *La prueba de oficio. Una perspectiva para el proceso dialógico civil*. Bogotá; Universidad Externado de Colombia.
- Rojas Gómez, M.E. (2015). *Lecciones de derecho procesal. Pruebas civiles*. Bogotá D.C.: Panamericana formas e impresos.

Shakespeare, W. (1998). *Otelo. Romeo y Julieta*. (3ª ed.). Barcelona: Andrés Bello Ediciones.

Trujillo Cabrera, J. (2006). *La carga dinámica de la prueba*; Bogotá D.C.: Leyer.

Valencia Zea, A. & Ortiz Monsalve, Á. (2006). *Derecho civil, parte general y personas*. Bogotá D.C.: Temis.

Vargas Lleras, G., Andrade, H., García, J.I., Vélez, J.C., Avellaneda, L.C. & Londoño, J. (2012) Exposición de motivos de la ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Cámara de Representantes.

Vidal Perdomo, J. (2009). *Derecho constitucional general e instituciones políticas colombianas*. Bogotá D.C.: Legis. Editores.

Normatividad nacional

Código de Procedimiento Civil Colombiano (2012). *Decreto 1400 de (6, agosto, 1970) Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil*. Bogotá: Presidencia de La República de Colombia. *Diario Oficial* 33.150. Código derogado por la Ley [1564](#) de 2012 en los términos establecidos en el artículo [626](#).

Código General del Proceso. (2014). *Ley 1564 de 2012 con Decreto 1736 de 2012 y notas constitucionales. Paralelo con legislación anterior*. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Constitución Política de Colombia de (1991). *Revisada y actualizada*. Bogotá D.C. Leyer.

Ley 153 De 1887 (Agosto 15) Por La Cual Se Adiciona Y Reforma Los Códigos Nacionales, La Ley 61 De 1886 Y La 57 De 1887. Publicada en los Diarios Oficiales 7.151 y 7.152 del 28 de agosto de 1887.

Ley 794 (8, enero, 2003) Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Congreso de Colombia. *Diario Oficial 45.05*.

Ley 1395 (12, julio. 2010) Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Bogotá D.C. Congreso de Colombia. *Diario Oficial 47.768*.

Ley 1564 (12, julio, 2012). Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. *Diario Oficial 48.489*.

Normatividad internacional

Código Procesal Civil Ecuatoriano. Artículo 399.

Derecho Procesal Civil de España LEC. Arts. 267, 326 Y S.S.

Jurisprudencia

Corte Constitucional de Colombia. (16, marzo, 2012), Sentencia T-213/12. Acción de tutela contra providencias judiciales-Reiteración de jurisprudencia sobre

requisitos generales y especiales de procedibilidad. Referencia: expediente T-3206395. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional de Colombia. (17, abril, 2013). Sentencia SU-226/13) **Acción** de tutela contra providencias judiciales-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad. Referencia: expediente T-3.407.509. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.

Corte Constitucional de Colombia. (16, octubre, 2014). Sentencia SU 774/14. Tutela. Tema: Valor probatorio de las copias simples en materia contencioso administrativo. N° de Expediente: T-4.096.171. Magistrado Ponente. Mauricio González Cuervo.

Corte Constitucional de Colombia. (30, junio, 2015). Sentencia T-398/15, Derecho de petición y Habeas Data-Procedencia de tutela para la protección. Referencia: Expediente T-4.714.387. Magistrada sustanciadora. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. (7, Junio, 2012). Sentencia 2012-01083., Expediente. Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2012-01083-00. Magistrado Ponente. Ariel Salazar Ramírez.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. (27, Marzo, 2015). STC3702-2015. Ref.: Radicación n.º 11001-02-03-000-2015-00585-00. Magistrado Ponente. Margarita Cabello Blanco.